

## **SENTENCIA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2009, NÚM. 32**

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Montecristi, del 12 de mayo de 1994.  
Materia: Civil.  
Recurrente: Banco de Reservas de la República Dominicana.  
Abogados: Dres. Eduardo A. Oller M., Federico A. Peynado C. y Melvin A. Franco T.  
Recurridos: Julio A. Isidor Silva y compartes.

### **CÁMARA CIVIL**

*Casa*

Audiencia pública del 16 de diciembre de 2009.

Preside: Rafael Luciano Pichardo.

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Banco de Reservas de la República Dominicana, entidad organizada y existente de conformidad con la Ley núm. 6133 del 17 de diciembre de 1962 y sus modificaciones, con su oficina principal en la 5ta planta del edificio Torre Bareservas, ubicado en la Av. Winston Churchill esquina Porfirio Herrera, ensanche Piantini de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representado por el señor Eligio Bisono B., dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal y electoral núm. 001-072875-5, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, en fecha 12 de mayo de 1994, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual dice de la manera siguiente: “Que procede acoger el recurso de casación de que se trata, y en consecuencia casar la sentencia impugnada, conforme a los términos del memorial de casación del recurrente”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 21 de febrero de 1996, suscrito por los Dres. Eduardo A. Oller M., Federico A. Peynado C. y Melvin A. Franco T., abogados del recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto la Resolución núm. 604/98 dictada el 19 de mayo de 1998, por la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se declara el defecto de los recurridos Julio A. Isidor Silva, Manuel Alfonso y Enrique Julio Isidor Medina, del recurso de casación de que se trata;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 1ro. de diciembre de 2009, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José E. Hernández Machado, juez de esta cámara, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La CORTE, en audiencia pública del 07 de abril de 1999 estando presente los jueces Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés y Julio Genaro Campillo Pérez, asistidos de la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella hace referencia, consta: a) Con motivo de una demanda en nulidad de embargo inmobiliario interpuesto por el Banco de Reservas de la República Dominicana contra Julio Alberto Isidor Silva, Manuel Alfonso Isidor Medina y Enrique Julio Isidor Medina, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Dajabón, dictó el 15 de marzo de 1990, una sentencia con el siguiente dispositivo: “**Primero:** Rechazar la apertura de debate solicitada por el Banco de Reservas de la República Dominicana, por conducto de sus abogados constituidos doctores: Federico A. Peynado C., Eduardo A. Oller Montas y Melvin A. Franco Tavares, por improcedente y mal fundada en derecho; **Segundo:** Que debe ratificar y ratifica el defecto pronunciado en la audiencia de fecha 10 de julio de 1988, contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, por falta de concluir; **Tercero:** Declarar la nulidad de todos los actos de procedimiento, para llegar a la expropiación y venta en pública subasta de los inmuebles comprendidos en el embargo, desde el mandamiento de pago incluyendo el embargo, la denuncia y el pliego de condiciones; **Cuarto:** Ordenar la radiación de la transcripción o inscripción del procedimiento de pago y actos subsecuentes; **Quinto:** Ordenar al conservador de hipotecas y registrador de títulos correspondientes, operar esta radiación sobre presentación de la sentencia a intervenir; **Sexto:** Comisionar como al efecto comisionamos al ministerial Guarionex Rodríguez García, de estrados de la Corte de Apelación de Montecristi, para notificar la presente sentencia; **Séptimo:** Condenar al Banco de Reservas de la República Dominicana al pago de las costas, distrayéndolas en provecho del infrascrito abogado, Dr. Federico G. Juliao G., quien afirma estarlas avanzando en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervino, la sentencia ahora impugnada en casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “**Primero:** Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Banco de Reservas de la República Dominicana, en contra de la sentencia civil de fecha 15 marzo de 1990, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Dajabón, por Litispendencia y Conexidad; **Segundo:** Condena al Banco de Reservas de la República Dominicana, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del Dr. Federico G. Juliao G., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad;”;

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los

siguientes medios de casación: “**Primer Medio:** Exceso en el ejercicio de sus facultades al asumir decisión extra-petita; **Segundo Medio:** Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; **Tercer Medio:** Violación flagrante y desconocimiento de los artículos 28, 29 y 32 de la Ley 834 del año 1978; **Cuarto Medio:** Falta de base legal y violación al derecho de defensa (otro aspecto)”;

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio de casación, el cual se examina en primer orden por convenir a la solución del caso, el recurrente alega, en síntesis, que únicamente y en situación excepcional puede una Corte de Apelación pronunciarse respecto de la litispendencia y conexidad y es en el caso en que estén apoderadas dos cortes diferentes, en el mismo grado, de un mismo litigio, según lo que plantea el artículo 28 de la Ley 834 ; que no es tan fácil como rechazar un recurso de apelación por litispendencia y conexidad, sino que este texto legal pone a cargo del tribunal la obligación de declinar en provecho del correspondiente, según sea el caso; que cuando la Corte de Apelación de Monte Cristi se pronuncia sobre la litispendencia y conexidad no se percató de que la ley le impone la obligación de declinar para ante otro tribunal del mismo grado; que en el evento de que el recurrente hubiese abierto dos recursos ante dos cortes distintas, entonces sí se entendería el alcance de la decisión adoptada. Al no ser así, no cabe dudas de que el tribunal de alzada ignora sin sonrojo alguno el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley 834;

Considerando, que el tribunal de alzada se limitó a fundamentar su decisión en el siguiente motivo: “que en el presente caso, dicha demanda debe ser rechazada, ya que en la especie, no se esperó la decisión definitiva del primer procedimiento incoado y sin saber la suerte del mismo, ya que dicho procedimiento de embargo fue llevado a cabo ante el tribunal de Monte Cristi, el cual fue apelado y sin haber sido fallado por la Corte de Apelación de Monte Cristi, se inició un procedimiento similar ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Dajabón, razón por la cual existe una litispendencia” (sic);

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada evidencia que la Corte a-quá al momento de estatuir sobre el presente caso también se encontraba apoderada del procedimiento que considero “similar” a éste, es decir, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 8 de febrero de 1988, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; que por la existencia de dicho recurso es, precisamente, que el tribunal de alzada rechaza el recurso de apelación intentado contra el fallo que dio origen a la hoy decisión impugnada, de fecha 15 de marzo de 1990, emitido por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Dajabón, sustentándose en el hecho de que entre ambos procesos existía “litispendencia y conexidad”;

Considerando, que el artículo 28 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, dispone que si el mismo litigio está pendiente ante dos jurisdicciones del mismo grado igualmente competentes para conocerlo, la jurisdicción apoderada en segundo lugar debe desapoderarse en provecho de la otra si una de las parte lo solicita. En su defecto, puede hacerlo de oficio; que, asimismo, el artículo 29 de la citada ley establece que si entre los asuntos llevados ante

dos jurisdicciones distintas un lazo tal que sea de interés de una buena justicia hacerlos instruir y juzgar conjuntamente, puede ser solicitado a una de estas jurisdicciones desapoderarse y reenviar el conocimiento del asunto a la otra jurisdicción;

Considerando, que de la simple lectura de los textos legales citados se infiere que una condición común e indispensable para que se pueda determinar que entre dos litigios hay litispendencia o conexidad es que existan dos jurisdicciones distintas apoderadas de éstos; que, además, dichos artículos prevén, una vez comprobada la litispendencia o la conexidad, que la jurisdicción apoderada en segundo lugar debe desapoderarse en provecho de la otra, en caso de litispendencia, y para la conexidad que cualquiera de las jurisdicciones apoderadas se desapoderará y reenviará el asunto a la otra jurisdicción;

Considerando: que, en la especie, como se ha dicho con anterioridad, la Corte a-qua hace constar, en la decisión recurrida, que ella estaba apoderada del conocimiento de los dos procesos que entendía eran “similares”, cuando para que se pudiera verificar la litispendencia y la conexidad, establecidas en la sentencia impugnada, era menester que otra jurisdicción estuviera apoderada de uno de los litigios antes señalados; que en esas condiciones el fallo impugnado resulta ser violatorio a las disposiciones de los artículos 28 y 29 de la Ley 834, tal y como lo alega el recurrente, razón por la cual dicho fallo debe ser casado, sin que resulte necesario ponderar los demás medios del presente recurso;

Por tales motivos, **Primero:** Casa la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Monte Cristi el 12 de mayo de 1994, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en las mismas atribuciones; **Segundo:** Condena a la parte recurrida al pago de las costas procedimentales y ordena su distracción en favor de los Dres. Eduardo A. Oller M., Federico A. Peynado C. y Melvin A. Franco T., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad ;

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 16 de diciembre de 2009, años 166° de la Independencia y 147° de la Restauración.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

[www.suprema.gov.do](http://www.suprema.gov.do)